

Venezuela: polarización, abstención y elecciones

Demetrio Boersner: internacionalista venezolano, ha sido profesor de Historia de las Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Venezuela, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores y embajador de su país en Rumania, Suecia y Austria.

Introducción

Venezuela, gobernada por el presidente Hugo Chávez (elegido democráticamente pero de vocación «revolucionaria» y tendencia autocrática), celebró elecciones nacionales legislativas el 4 de diciembre de 2005, que resultaron en una nueva Asamblea Nacional, dominada total y exclusivamente por las fuerzas políticas del gobierno, ya que la oposición se abstuvo de votar debido a sus fuertes dudas – recogidas y reportadas por la misión observadora de la Unión Europea– sobre la transparencia del proceso comicial y la posibilidad de un fraude electrónico¹.

En el mes de diciembre de 2006, el país irá nuevamente a las urnas, esta vez para elegir al presidente de la República para un período de seis años. La oposición espera poder participar en esa futura oportunidad, con la condición de que se cambie la composición de la autoridad electoral y se corrijan las fallas mencionadas. El presidente Chávez se presentará sin duda como candidato para un segundo mandato, y los grupos opositores tratarán de escoger un contracandidato único y de elaborar un programa conjunto.

Antecedentes históricos

Venezuela, nación de 25 millones de habitantes, situada en la costa septentrional de América del Sur, ocupa el tercer puesto entre los países exportadores de petróleo del mundo. Sus principales socios comerciales son, en orden cuantitativo, Estados Unidos, Latinoamérica-Caribe y la Unión Europea.

¹. Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Venezuela: *Elecciones Parlamentarias 2005; Declaración Preliminar*, Caracas, 6 de diciembre de 2005.

Luego de haber jugado un papel relevante en las guerras de independencia de Hispanoamérica (1810-1825), Venezuela recayó en un prolongado estado de atraso, división y dependencia. A partir de 1930, su gradual transformación de país agrario a petrolero se tradujo en un proceso de modernización, que incluyó el eventual establecimiento de una democracia representativa y pluralista, generadora de importantes reformas sociales, que se mantuvo estable entre 1958 y la última década del siglo xx. La estabilidad democrática se basaba en un pacto de gobernabilidad entre los dos principales partidos políticos: el socialdemócrata Acción Democrática (AD) y el demócrata-cristiano COPEI. El orden económico era de estructura capitalista rentista: el ingreso fiscal petrolero fomentaba la inversión productiva y financiaba estimables servicios sociales y mecanismos redistributivos. La nacionalización de la industria petrolera en 1975 fortaleció el poder económico del Estado. La política exterior combinaba una línea de solidaridad tercermundista y de membresía activa en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con el mantenimiento de relaciones de amistad, franqueza y confiabilidad con Estados Unidos y Europa Occidental.

Sin embargo, a partir de 1980 el modelo político venezolano entró en crisis. Por falta de una adecuada diversificación productiva, el ingreso petrolero ya no alcanzaba para satisfacer las necesidades y expectativas de una población que casi se había duplicado en el transcurso de veinte años. Esa tendencia coincidió con un paulatino deterioro del liderazgo político establecido y de su capacidad para percibir y reflejar el sentir de la sociedad. El intento, en 1989, de imponer bruscamente un paquete de ajustes macroeconómicos neoliberales provocó un violento estallido social seguido de una sangrienta represión. En 1992, un grupo de militares encabezados por el teniente coronel Hugo Chávez se sublevó en un fracasado golpe de Estado contra el gobierno constitucional. Seis años más tarde, Chávez, prematuramente indultado de su condena por rebelión armada, fue elegido presidente constitucional por mayoría absoluta.

El movimiento militar conspirativo encabezado por Chávez existía desde los años 80 y tuvo dos fuentes de inspiración contradictorias. Por un lado, recibió insumos ideológicos de factores militares y civiles argentinos de tendencia fascista y hasta neonazi. Por otro, fue infiltrado en grado creciente por marxistas-leninistas venezolanos, cuya influencia se ha fortalecido: el presidente Chávez no cesa en sus expresiones de admiración hacia el sistema cubano y su líder. Sin embargo, la temida «cubanización» del proceso venezolano se ve frenada por las contradicciones internas de la coalición populista que rodea a Chávez y limita su

poder personal. El mandatario venezolano se ve obligado a lidiar con corrientes diversas, algunas de corte ideológico radical y otras atraídas por la «sociedad de consumo»².

Concentración del poder y división nacional

Desde el momento en que asumió el poder, en enero de 1999, el presidente Hugo Chávez ha manifestado su intención de refundar la república y llevar a cabo una «revolución» de alcance y duración indefinidos. A diferencia de los gobernantes que, al asumir el mando, enfatizan la unidad nacional y prometen actuar al servicio de todos, Chávez se autodefinió como líder del «pueblo» enfrentado en lucha implacable con una «oligarquía» reaccionaria y antipatriótica con la que no podía haber una convivencia negociada. El tono amenazante e hiriente de casi todos sus discursos ha tendido a dividir a los venezolanos, provocando temor y rencor en quienes discrepan con su proyecto, y ha sido la causa primaria de la creciente movilización en su contra, tanto de la clase media como de contingentes obreros y populares. El maniqueísmo presidencial también ha provocado la desertión de grupos y personalidades inicialmente chavistas.

La concentración del poder en manos de Chávez atravesó diversas etapas. Actuando con rapidez, organizó un referendo popular en abril de 1999 para autorizar la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para establecer una «Quinta República» que reemplazaría la «Cuarta», del régimen democrático anterior. Tres meses después, en otro acto comicial, fueron elegidos los diputados constituyentes, partidarios de Chávez en su gran mayoría. La Constitución «bolivariana» que elaboraron muy de prisa contiene elementos progresistas loables, junto con otros criticados por fortalecer demasiado al jefe de Estado, afectar la separación de poderes y conceder fueros indebidos al estamento militar. Una clara mayoría de votantes aprobó la nueva Carta Magna en una consulta celebrada en diciembre de 1999.

La Asamblea Constituyente, además de cumplir su función específica, arrebató sus atribuciones al Congreso Nacional elegido un año antes. El presidente Chávez, a

². Agustín Blanco Muñoz: *Habla el comandante*, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1998; Alberto Garrido: *Guerrilla y conspiración militar en Venezuela*, Fondo Editorial Nacional José Agustín Catalá, Caracas, 1999; A. Garrido: *Guerrilla y revolución bolivariana*, Caracas, 2003; A. Garrido: *Notas sobre la revolución bolivariana*, edición del autor, Mérida, 2003; A. Garrido, *Revolución bolivariana 2005*, edición del autor, Caracas, 2005.

través de la proclamación de una «emergencia judicial» y una «emergencia legislativa» asumió el control político del Tribunal Supremo de Justicia y del Poder Judicial, para poder formalizar la ruptura con la constitucionalidad anterior. La ANC fue declarada «supraconstitucional» y fuente de poder «originario», lo que le dio facultades para legislar y efectuar altos nombramientos.

En las «megaelecciones» efectuadas el día 30 de julio del 2000, el pueblo nuevamente eligió autoridades nacionales, regionales y municipales, esta vez con base en la nueva Constitución. En la votación presidencial, Chávez triunfó con el 60,3 % de los sufragios y el Polo Patriótico oficialista ganó 99 de los 165 escaños parlamentarios. El período presidencial, anteriormente de cinco años, pasó a seis (más los dos años ya transcurridos) y quedó autorizada la reelección inmediata del mandatario.

No obstante el éxito alcanzado a mediados de 2000, desde finales de ese año y a lo largo de 2001, Chávez sufrió una fuerte caída en su popularidad. Alentado por su ratificación en la presidencia, radicalizó sus planteos de cambio social y de enfrentamiento a la «oligarquía», a la vez que fortaleció la concentración de poder y los mecanismos para intimidar o controlar a diversos sectores de la sociedad. Solicitó al Parlamento una «ley habilitante» para legislar ejecutivamente en materia económica y social. Al mismo tiempo, emprendió una política exterior de enfrentamiento cada vez más intenso con el gobierno de EEUU y de búsqueda de «alianzas estratégicas» con enemigos y adversarios de esa potencia.

Por otra parte, el presidente Chávez y su gobierno entraron en conflicto con el movimiento sindical venezolano, al desconocer la legitimidad de las autoridades de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), vieja organización obrera de tendencia mayoritariamente socialdemócrata, aprobada y apreciada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). En acciones huelguísticas y en elecciones sindicales a fines de 2001, la CTV reiteradamente derrotó intentos del gobierno de ilegalizarla y reemplazarla con una organización sindical oficialista.

Intentos de remoción del presidente Chávez

En los primeros meses de 2002, se intensificó la protesta masiva de la oposición democrática. Además de continuar el conflicto sindical, el gobierno estaba empeñado en reestructurar radicalmente la empresa petrolera nacional, Petróleos de Venezuela S.A.(PDVSA). Bajo los gobiernos democráticos anteriores, PDVSA, pese a ser de propiedad estatal, había funcionado según criterios comerciales, insertándose exitosamente en el ámbito petrolero global. El presidente Chávez decidió someterla a un control rígido y reorientar su acción hacia el desarrollo «endógeno» y el mercado regional. Ello ocasionó agudos conflictos entre el gobierno y los trabajadores y gerentes de PDVSA. Creció el descontento general y se sucedieron huelgas y marchas de protesta cada vez más masivas. Ya la oposición exigía no sólo un cambio de rumbo político, sino la dimisión del presidente. El 11 de abril de 2002, una manifestación de cerca de un millón de personas marchó hacia la sede del gobierno para exigir la salida del jefe de Estado. La marcha terminó en una matanza cuyos exactos pormenores todavía son objeto de controversias. Pocas horas después, el alto mando militar exigió la renuncia de Chávez y lo puso bajo arresto. Si en las horas subsiguientes se hubiera constituido una junta de gobierno amplia y representativa, que respetara la Constitución y los poderes legítimos, el mundo habría aceptado la nueva situación. Pero la oposición se anarquizó y permitió que un reducido grupo conservador insólitamente ocupara el gobierno y proclamara como jefe de Estado interino al presidente de la federación de cámaras empresariales. Del vacío de poder causado por la desorganización opositora surgió una absurda fase «golpista» que serviría de argumento justificador a Chávez, quien fue restituido en la Presidencia de la República el día 13 de abril por la presión de sus partidarios civiles y de un sector clave del Ejército.

Aunque inicialmente se mostró conciliador, pronto el presidente volvió a su estilo agresivo, calificando de «oligarcas» y «golpistas» a los opositores y disidentes. El gobierno adoptó medidas represivas y emitió decretos-leyes basados en la llamada «ley habilitante». Estas iniciativas, que afectaban las libertades civiles, económicas, laborales y educativas, causaron honda preocupación en la sociedad civil, desde la elite económica hasta la clase obrera. Al mismo tiempo, la falta de estímulos a la inversión productiva ahondaba el desempleo y la pobreza. Por ello, a fines de 2002, el país se encontraba descontento y casi diariamente se realizaban manifestaciones y protestas que no solo buscaban un cambio de política sino, nuevamente, la dimisión o destitución de Chávez. Un grupo de militares, aún activos pero sin mando de tropas, se unió a las protestas.

Desde diciembre de 2002 hasta febrero de 2003, los sectores laboral y empresarial conjuntamente llevaron a cabo una huelga nacional de duración indefinida que paralizó el país e interrumpió el suministro de petróleo venezolano al exterior. Pero la huelga no logró desalojar a Chávez del poder, y finalmente colapsó por el agotamiento de fuerzas y recursos. El presidente aprovechó la derrota de sus adversarios para implantar una fuerte represión contra los huelguistas petroleros y ganar el control absoluto de PDVSA. Por otra parte, la repercusión internacional del conflicto hizo que se formara un grupo de países «amigos de Venezuela», que ofrecieron sus buenos oficios conciliadores. Asimismo, la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Carter enviaron «facilitadores de diálogo» al convulsionado país. Los esfuerzos, sobre todo de la OEA, fueron parcialmente exitosos en el sentido de lograr la firma de un acuerdo entre el gobierno y la oposición venezolanos, para celebrar un referendo nacional sobre la permanencia de Chávez en el poder.

Sin embargo, terminó el año 2003 y transcurrió más de la mitad de 2004 sin que se efectuara el referendo prometido. La oposición recogió millones de firmas en solicitud de dicha consulta, pero tres veces el Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por partidarios del presidente, invalidó las firmas, o parte de ellas, por supuestas fallas o vicios. Finalmente, la terca persistencia de la oposición, aunada a nuevas gestiones de la OEA y el Centro Carter, lograron que el referendo revocatorio se efectuara el día 15 de agosto de 2004³.

Las fuerzas opositoras y muchos analistas habían abrigado la convicción de que el referendo resultaría en una clara mayoría contraria a la permanencia de Chávez en el poder. Esa noción se basaba en la evidente caída de popularidad del presidente todavía a comienzos de 2004. Pero Hugo Chávez llevó adelante una ofensiva política y social exitosa, entre enero y agosto, para cambiar el ánimo de la población y conquistar el apoyo de una mayoría de votos. Mediante enormes inversiones estatales, costeadas por los altos precios del petróleo, y con la importante ayuda de expertos cubanos enviados por el presidente Castro, se lanzaron en Venezuela importantes programas sociales (denominados «misiones») a favor de las clases de bajos ingresos. Además de la creación de una vasta red de mercados populares subsidiados, que venden a precios reducidos, las misiones han llevado atención médica a los barrios pobres, alfabetizado a millares de personas, suministrado capacitación técnica a muchos jóvenes y cumplido otras tareas que,

³. Armando Durán, *Venezuela en llamas*, Caracas, Debate, 2004.

aunque no entrañen cambios estructurales, alivian la pobreza y crean núcleos de satisfacción y esperanza. A ello se agrega un programa de creación de cooperativas y de mecanismos de cogestión o autogestión obrera en algunas empresas, y la expropiación y entrega de numerosas haciendas o fincas a asociaciones campesinas. Las fuerzas opositoras, en cambio, confiadas en su triunfo, se concentraron en tácticas de corto plazo y dejaron de presentar al país un convincente programa alternativo. Por todo ello, Chávez ganó el referendo con la cifra oficial de 58% de votos a favor de su permanencia en el poder, contra 42% que exigía su remoción.

Abstencionismo electoral en 2005

La oposición venezolana permaneció sumida en una suerte de *shock* durante gran parte de 2005 y se mostró pasiva, mientras Chávez explotó al máximo su triunfo en el referendo y la favorable coyuntura económica y política internacional. Continuó ampliando la obra de las misiones, a la vez que procuró entusiasmar a sus seguidores con la promesa de un «socialismo del siglo XXI» que pondría fin a las injusticias seculares. Al mismo tiempo, logró convertirse en una figura internacional relevante, mediante generosas donaciones de petróleo barato y otras ayudas económicas y sociales a diversas naciones del hemisferio, junto con una estridente prédica «antiimperialista» a lo largo y ancho del planeta. Los elevados precios del petróleo durante todo el año, las crecientes desventuras del presidente George Bush (blanco preferido de sus ataques) y el ascenso político de la izquierda latinoamericana sirvieron de soportes a la política exterior del líder venezolano y realzaron su prestigio en algunos segmentos de la opinión pública mundial. Por último, Chávez acompañó sus gestos de radicalización ideológica con medidas represivas contra sus adversarios internos: arrestos y juicios a personas acusadas de pasados actos de subversión o de conspiraciones más recientes.

En tal ambiente, buena parte de los observadores venezolanos y extranjeros pensaban que, en las elecciones nacionales legislativas del 4 de diciembre de 2005, el oficialismo venezolano lograría movilizar a un gran contingente de sus simpatizantes y clientes políticos para acudir a las urnas. Por ello, a muchos les parecía insensata y políticamente suicida la tesis de aquellos opositores que pregonaban la abstención como forma de protesta contra la falta de transparencia del proceso y la poca confiabilidad de los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Resultó, sin embargo, que el abstencionismo de hecho reflejaba un sentimiento muy generalizado en toda la población del país, inclusive los

supuestos militantes de la causa «revolucionaria». Los locales de votación quedaron vacíos y, a pesar de los reiterados llamamientos del gobierno para que sus partidarios salieran a votar y la decisión del CNE de extender la duración del proceso en dos horas adicionales, al finalizar el día quedó claro que menos del 25% de los venezolanos había ido a elegir sus representantes parlamentarios.

Perspectivas inciertas para 2006

Los extraños comicios parlamentarios de diciembre de 2005 se saldaron con una victoria formal y una derrota real para el régimen de Chávez. Debido a la abstención de la oposición, ganó el 100% de los escaños en la Asamblea Nacional. Pero, por otro lado, perdió sus credenciales democráticas: un parlamento sin oposición indica la existencia de un país sin vías de diálogo pacífico institucionalizado. Contra sus deseos, el presidente ha perdido ante el mundo su imagen de «demócrata» y será percibido –de manera realista– como populista autoritario.

Otro grave inconveniente de la actual situación consiste en el hecho de que, sin oposición en el parlamento, la coalición oficialista no tiene con quién polemizar, salvo con sus propios integrantes. Ya existen indicios de serios desacuerdos entre los diversos grupos políticos y sociales que rodean al presidente, que no forman un partido monolítico sino una constelación de sectores heterogéneos: algunos de izquierda radical, otros de adusto corte militarista y muchos de carácter pragmático y hedonista, interesados en consolidar su posición de «nueva clase» o «burguesía burocrática». Al mismo tiempo, el abstencionismo del 4 de diciembre, sin duda, indica un serio desencanto de sectores populares que hasta hace poco celebraban la creación de las «misiones» y las cooperativas, pero que ya se han convertido en sus críticos.

Todo ello significa que las elecciones presidenciales de diciembre de 2006 deberían ofrecer posibilidades a la oposición de derrotar y desplazar a Chávez, siempre y cuando ésta logre superar su actual crisis de indecisión, divisiones e inmovilismo. A tal fin, necesitaría acometer dos tareas urgentes: redactar un programa democrático convincente, que armonice la libertad individual con la equidad social, y escoger un candidato presidencial capaz de atraer no solo a los actuales opositores sino también a los desencantados del chavismo.